

MOVILIZACIONES INDÍGENAS Y PROTESTAS SOCIO-AMBIENTALES EN EL SALAR DE ATACAMA-NORTE DE CHILE

Paola Bolados García¹

Guillaume Boccara²

Resumen: Después del retorno a la democracia en Chile –a fines del siglo pasado–, se inicia un proceso de reconocimiento formal de los pueblos originarios a través de una política indígena y multicultural. No obstante, esta coincidió con el avance y la consolidación del modelo neoliberal impuesto durante el régimen militar a mediados de la década de 1970, el cual continuó privatizando recursos naturales concentrados en territorios indígenas. En este trabajo mostramos como este neoliberalismo multicultural desplegado en un contexto de nuevas privatizaciones, fue contestado y resistido por las poblaciones indígenas atacameñas en el norte de Chile a mediados de la primera década del nuevo siglo, poniendo en crisis las relaciones con el estado y las empresas –principalmente mineras y turísticas–, presentes en su territorio. Nos centramos en las luchas emprendidas por las comunidades atacameñas a mediados del 2000 y sus intentos por recuperar los recursos naturales y culturales mercantilizados bajo un discurso de derechos indígenas y ambientales propagado por los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos (2000–2006) y Michelle Bachelet (2006–2010).

Palabras claves: neoliberalismo multicultural; movilizaciones indígenas; protestas sociales; salar de Atacama–norte de Chile.

¹ Académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Este artículo forma parte del FONDECYT 3120062 y del Convenio de Desempeño de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. E-mail: paola.bolados@uv.cl.

² Director del Centro Franco-Argentino, Universidad de Buenos Aires. Embajada de Francia en Argentina. E-mail: boccara.guillaume@gmail.com.

Abstract: After the return of democracy in Chile at the very end of the 1980s, the combination of multicultural policies and indigenous politics contributed to the formal recognition of the existence of cultural diversity in a country that had always represented itself as deprived of Native American People. However, this trend coincided with the consolidation of the neoliberal economic model that had been imposed during the military dictatorship (1973-1988). A model that kept on privatizing the natural resources located within indigenous territories. This article deals with the ways Indigenous People of Northern Chile (Atacama) have been facing and resisting multicultural neoliberalism. We shall account for the nature of the relationships between Indigenous People, mining corporations, the industry of tourism, and the State. We will thus focus our attention on the indigenous mobilizations that took place in the mid 2000 and that aimed at recovering their natural and cultural resources. We shall then point out the contradictions that exist between the official discourse of entitlement and recognition of Indigenous rights fostered under Ricardo Lagos (2000-2006) and Michelle Bachelet's mandates (2006-2010), on the one hand, and the pervasiveness of the commodification model that tend to deepen the roots of neoliberalism, on the other.

Keywords: Multicultural Neoliberalism; Indigenous Mobilizations; Social Movement; Salar de Atacama; Northern Chile.

Instaurando la democracia multicultural de libre mercado

Retornada la democracia en Chile a inicios de los años 1990 y luego de diecisiete años de dictadura militar, la política indígena avanzó en términos de reconocimiento formal con la aprobación de la Ley Indígena en 1993 y la subsecuente creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entidad responsable de coordinar las acciones en el marco de las nuevas relaciones entre el Estado chileno y las poblaciones originarias nacionales. A través de estas acciones, el Estado explicitó su interés por atender el problema indígena proveyéndole un nuevo cauce a través de una política pública en el Estado. Se dio así paso a una nueva comprensión del ejercicio de ciudadanía diferenciada, la cual se tradujo principalmente en la apertura de una multiplicidad de espacios para la participación indígena y la implementación de propuestas de desarrollo con identidad e inclusión

social.

En el caso de Chile, la participación –entre ellas la indígena-, se constituyó en uno de los principales emblemas de lucha contra el régimen militar que gobernó entre 1973 y 1989, y en el discurso oficial utilizado por la coalición de partidos democráticos para conquistar el poder y asegurar el triunfo en las urnas. Sin embargo, la discontinuidad y ruptura discursiva en el campo político cimentada en la oposición represión-dictadura/participación-democracia, no significó un cuestionamiento respecto al sistema económico implantado durante el gobierno militar, sino más bien implicó una continuidad del modelo y medidas parciales que afianzaron su desarrollo y consolidación (PALEY, 2001). En este sentido, las políticas públicas de los años 90 se concentraron en mitigar los efectos de los ajustes económicos de los años 80, dirigiendo sus acciones y programas hacia los sectores más afectados y socialmente más conflictivos, ratificando el rol subsidiario del Estado y trasladando las responsabilidades estatales al campo privado y paraestatal.

Había que volver a democratizar al país sin cuestionar los cambios estructurales en lo económico. La transición a la democracia que algunos definieron como una transición negociada, dejó el marco legal y constitucional adecuado para que los cambios posteriores fueran sólo ajustes y auto regulaciones del sistema. Esto se vio reflejado especialmente en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), período en el cual los compromisos asumidos en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) se vieron frenados radicalmente. Como lo señala el abogado y especialista en temas jurídicos indígenas José Aylwin: “La administración Frei (1994-2000) había dejado en claro que los derechos de los pueblos indígenas estaban supeditados el desarrollo productivo vinculado a la economía mundial” (AYLWIN, 2007, p. 19). Esto a propósito del resurgimiento del conflicto mapuche producto del proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el sector Ralco-Biobío. El mismo dejó en evidencia las limitaciones y debilidades de la política indígena y de la gestión de la CONADI ante las

presiones económicas transnacionales. En este período se inició a su vez, una estrategia de criminalización contra el movimiento mapuche, el cual estuvo fuertemente respaldado y promovido por medios de comunicación de corte conservador. Las paradojas de la democracia chilena, que se definía como participativa e intercultural, fueron revelando cada vez más sus contradicciones, alentando aún más la radicalización de las demandas de autonomía política y territorial en las organizaciones mapuches.

Pese a estos conflictos durante la gestión de Eduardo Frei, las expectativas sobre el período del socialista Ricardo Lagos aumentaron. Durante su campaña se comprometió a mejorar la Ley Indígena, ratificar el convenio 169 y reformar la constitución en pro del reconocimiento de los pueblos indígenas. Además comprometió la devolución de tierras, principal demanda de las organizaciones indígenas y la creación de una política de Verdad Histórica y Nuevo Trato encargada de realizar un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile. No obstante, la carta de intenciones del gobierno de Lagos fue insuficiente para aplacar los conflictos de tierras que en el sur durante su gobierno recrudecieron, las cuales significaron la aplicación de una serie de acciones represivas que recordaron varias de las prácticas de la dictadura, mientras que paralelamente la implementación de un programa destinado a fomentar la participación y el desarrollo con identidad. En una parte del territorio operaba un estado democrático y multicultural; mientras en otro, un estado de excepción que criminalizaba a los indígenas como “mapuches terroristas” bajo la aplicación de la ley de seguridad del estado y la ley antiterrorista.

Esta novedosa administración de las diferencias en el contexto neoliberal y multiculturalista del Chile post 90, favoreció la utilización de la participación y el etnodesarrollo en el modelamiento de relaciones sociales basadas en la idea de grupos de clientes o consumidores de políticas indígenas e interculturales. Como afirma Grüner, las luchas por las diferencias culturales promovidas por el multiculturalismo no fueron capaces de cuestionar la universalidad con la que se impuso el sistema

capitalista, mostrando que incluso los Estudios Culturales como la izquierda progresista sucumbieron ante esta hegemonía vía “academización”, cuando no a la lisa y llana mercantilización fetichizada de los productos culturales” (GRÜNER, 2005, p. 38). En definitiva, mientras algunos celebraron con el cambio de siglo la era del multiculturalismo, otros no obstante auguraron el triunfo del capitalismo multinacional, cuya lógica cultural y forma ideológica ideal denominado multiculturalismo, lo transformaron “en un tipo de racismo negado, invertido, autorreferencial, un racismo con distancia que respeta y reconoce la identidad del Otro” (ŽIŽEK, 2005, p. 172). Desde esta perspectiva, el multiculturalismo emergió como un universalismo cuyo fin pretendía mantener el equilibrio entre un nacionalismo sano y sus excesos, así como también en un regulador de los fundamentalismos particularistas amenazantes de los derechos humanos, la democracia y el mercado, tres pilares fundamentales del discurso y la práctica capitalista contemporánea (ŽIŽEK, 2005).

Esta situación se vio particularmente crítica en aquellos contextos donde el interés del capitalismo global por la explotación de los recursos naturales ubicados en territorios indígenas devino en la apertura de lo que Watts denomina *espacios gobernables de indigeneidad*. Estos espacios se configuran fundamentalmente en aquellos territorios donde las demandas indígenas e intereses transnacionales se enfrentan por la apropiación de los recursos medioambientales y en donde los diversos agentes aún con grados de poder desiguales, ejercen presiones para obtener cuotas de participación y control sobre estos (WATTS, 2003). Esta variante del multiculturalismo Charles Hale la definió como *multiculturalismo neoliberal*, comprendiéndola como el nuevo espacio abierto por las reformas sociales y culturales introducidas por el neoliberalismo y que se configuraron en un escenario de confrontación entre comunidades indígenas, Estado y agencias de desarrollo, y también en un ámbito de negociación favorable a sus demandas (HALE, 2002). Desde esta interpretación, y bajo las condiciones reducidas que el multiculturalismo neoliberal impone, los propios agentes indígenas

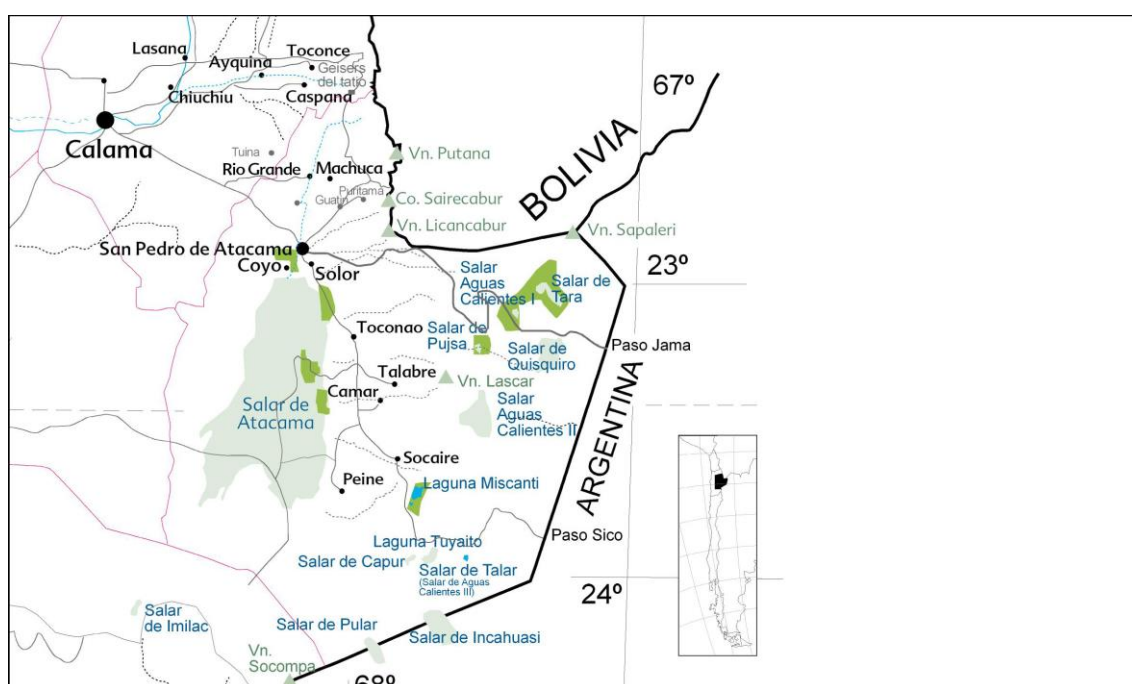
consiguen visibilizar sus reivindicaciones. Un contexto que se presenta amenazante en una primera mirada, constituye una oportunidad para desplegar estrategias de resistencia entre las comunidades y agrupaciones indígenas involucradas.

En el caso de la población indígena atacameña, ubicada en el norte de Chile, Región de Antofagasta (Figura 1), su complejidad se relaciona con su trayectoria histórica que desde el siglo XIX la convirtió a nivel internacional en una de las principales productoras de metales. De su historia vinculada al salitre y a la plata desde mediados del siglo XIX, se convierte en la más importante productora de cobre en el siglo XX con la mina de Chuquicamata. Luego, en los años 1980 y bajo la dictadura militar, el salar de Atacama se constituirá en el centro de la explotación del litio, cuyo valor estratégico estimulará su privatización silenciosa en manos de capitales nacionales y transnacionales, quienes ostentaron el control de su producción durante las últimas 3 décadas. Es esta actividad la que pondrá en los mapas globales a la región del salar como la principal reserva mundial de litio, y la que definirá las presiones sobre el territorio por satisfacer la demanda regional de agua requerida por la industria minera metálica (cobre) y no metálica (litio). En el caso del salar de Atacama, convertido en centro de producción del litio y sus derivados, la actividad está en manos de dos empresas: SQM (ex Sociedad Química y Minera de Chile -SOQUIMICH- controlada por el ex cuñado de Augusto Pinochet) y la Sociedad Chilena del Litio, actualmente en manos de la estadounidense Rockwood Lithium (hasta el 2004 en manos de la alemana CHEMICAL).

Paralelamente, el salar de Atacama durante el siglo XX se configura en un lugar de interés científico, principalmente arqueológico que lo transformaran en uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional. La industria del turismo, se constituye así en una actividad relevante en la región a partir de los años 1990, estimulando procesos socio-identitarios complejos producto de la incorporación masiva de población no indígena atraída por esta actividad. El control sobre los recursos naturales y

culturales bajo los discursos del patrimonio, se traducirán de ahí en más, en disputas y controversias permanentes entre comunidades y Estado, a la vez entre éstos y los capitales nacionales y transnacionales que pretenden explotar el paisaje y la cultura material para el desarrollo turístico. El salar de Atacama, se constituye entonces a fines del siglo XX en un lugar *de y para el desarrollo capitalista*.

Figura 1 - Región de Antofagasta.



Fonte: elaboración propia.

Es a partir de esta especificidad histórica que surge la tesis de invertir la fórmula de Hale para el caso de Chile, primer país en implementar medidas neoliberales, planteando que lo que se desplegó en Chile a comienzos del nuevo siglo fue más que un multiculturalismo neoliberal, un *neoliberalismo multicultural*. Este se caracterizaría principalmente por representar más que una versión limitada del multiculturalismo, una versión extendida del neoliberalismo hacia campos

socioculturales antes ignorados. En este caso, extendido al campo de lo cultural y lo identitario (BOLADOS, 2012, p. 136).

Construcción e instauración del neoliberalismo multicultural

Aunque en Latinoamérica el discurso multiculturalista ha sido en general asociado a las reformas democratizadoras de los años 1990 y a las luchas de los movimientos sociales de décadas anteriores, sus antecedentes lo vinculan directamente con la arremetida (*neo*) liberal que se impuso en el escenario post guerra fría. El neoliberalismo emergió así como una nueva hegemonía cultural cuyo proyecto social consistió en remodelar las relaciones entre estado y sociedad, mostrando renovadas técnicas de transformación de los ciudadanos en *consumidores cada vez más activos y autorregulados* (ROSE, 2006). Las políticas impulsadas por las agencias de desarrollo multilaterales a partir de la segunda mitad del siglo pasado, desplegaron una nueva cartografía y se hicieron cargo de las demandas de los movimientos sociales y étnicos a través de la participación e involucramiento de diversos agentes: bancos multilaterales, estados nacionales, organizaciones internacionales y no gubernamentales, sectores de los movimientos indígenas, etc.

Las políticas y/o programas inter o multiculturales se constituyeron en la nueva ingeniería social de la industria del desarrollo global (BRETON, 2003), cuyos efectos tendieron a desligar al Estado de sus obligaciones tradicionales y a responsabilizar a los ciudadanos como consumidores de una ciudadanía cultural diferenciada (SCHILD, 2000). Este proceso se canalizó vía agencias de desarrollo internacional, las cuales expandieron y profundizaron el modelo neoliberal a través de una lógica subsidiaria y focalizada a sectores sociales potenciales de conflicto. En este marco ideológico-conceptual, las comunidades indígenas fueron tratadas como grupos corporativos que debían ser objeto de intervenciones de gobierno,

orientadas a empoderar y responsabilizar a través de la participación y la promoción de su capital social. Conceptos promovidos especialmente por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, propagaron la idea del capital social como herramienta que los propios grupos excluidos podían utilizar para su salida del “subdesarrollo”, apuntando así a políticas públicas que conjugaran participación y acceso a nuevos servicios sociales como ejes de las transformaciones. Se puso en marcha un proceso de *despolitización de la política* (ŽIŽEK, 2005) y una subsecuente *politización de la cultura* (WRIGHT, 1998), cuyo énfasis estuvo en las dimensiones técnicas de los problemas sociales. En este sentido, la utilización del término inter o multicultural tuvo una función estratégica y política para las comunidades indígenas en su lucha por el reconocimiento, a la vez que sirvió para naturalizar un tipo de (neo) liberalismo democrático y multicultural desde el aparato estatal-trasnacional tendiente a profundizar mecanismos de privatización y tercerización en los campos de la sociedad y la cultura (DAGNINO, 2006).

En Chile, este marco ideológico y político que hemos definido como neoliberalismo multicultural, comenzó a configurarse con la puesta en marcha de una política indigenista e intercultural, la cual fue profundizada en la década siguiente con la implementación de un programa multicultural de amplio alcance y cuantiosos recursos. Nos referimos al *Programa de Desarrollo Integral para comunidades indígenas* mejor conocido por el nombre de *Orígenes*, el cual se marqueteó como un programa estatal financiado con fondos del gobierno de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contrato de préstamo firmado el año 2001 fue aproximadamente por un monto de 113 millones de dólares, los cuales serían distribuidos en cinco componentes: educación y salud intercultural, ámbito productivo, fortalecimiento institucional y mercadeo social. Debido a la novedad y complejidad del programa, Orígenes se estructuró en dos fases de implementación (2001-2006 y 2007-2009). Su objetivo era *mejorar las*

condiciones de vida de los tres grupos indígenas mayoritarios del país (mapuche, aymara y atacameño) a través de dos ejes principales: la *participación social* y el *desarrollo integral con identidad*. El componente de salud intercultural del programa contempló en otros aspectos “fortalecer la medicina indígena” y “promover la construcción de modelos de atención intercultural” entre los grupos indígenas rurales beneficiados (documento de contrato. Fase 1, Programa Orígenes). Sin embargo, como lo reconocen los agentes a cargo del diseño y de la ejecución del programa, su implementación estuvo directamente vinculada con los propósitos de desmovilizar y apaciguar el conflicto indígena mapuche que se había nuevamente recrudecido a fines de la década de los años 90. La construcción de la central hidroeléctrica Ralco en territorio pehuenche, Región del Biobío (perteneciente en ese entonces a capitales españoles Endesa y hoy en manos de la multinacional italiana Enel), dejaron en evidencia las debilidades y contradicciones entre la política indígena y medio ambiental de los gobiernos democráticos. Tantas fueron las dificultades vinculadas a la implementación del programa Orígenes en territorio mapuche, que este fue rebautizado por algunos dirigentes y miembros de comunidades indígenas con el nombre de “problema Orígenes”. Título que se ganó principalmente por su instalación violenta y jerárquica, y cuyos efectos se observaron en la superposición con los programas ya existentes que promovió una invisibilización de los procesos anteriores, cooptando las experiencias más avanzadas a través de la oferta de recursos para su financiamiento y marginando a los equipos locales y terapeutas indígenas, quienes debieron someterse a las estructuras verticalistas del programa. De esta manera, y al parecer de muchos de los agentes indígenas y estatales, en nombre de la participación social y el desarrollo integral con identidad, lo que se intentó conseguir a través del componente de salud intercultural fue burocratizar (CUYUL, 2008) y neoliberalizar el campo de la salud intercultural vía mecanismos de tercerización a través de la figura de consultoras externas, las cuales reforzaron los mecanismos de privatización en la producción de los saberes

asociados a la medicina indígena (BOCCARA y BOLADOS, 2010).

No obstante los efectos del componente de salud de Orígenes en el territorio mapuche, la apertura de este campo en el área atacameña del Salar, se tradujo paradójicamente en una revitalización y visibilización de las demandas en relación a la salud ancestral, como fueron reconocidas las prácticas curativas entre las organizaciones locales. Este proceso a su vez, favoreció la incorporación de nuevos agentes indígenas que dieron vida a la primera asociación de sanadores, mientras que paralelamente implicó la marginación de otros sectores vinculados a la política indigenista de los años 1990 y que hasta ese momento se habían legitimados como los administradores acreditados del campo de la salud intercultural. En este proceso las definiciones sobre *¿qué es lo intercultural y cómo se entiende la participación social y el desarrollo integral con identidad promovidos por el programa?* constituyeron el eje de las luchas y debates generados con la llegada del componente de salud intercultural al área atacameña.

El campo abierto con el componente de salud intercultural del programa Orígenes en el territorio atacameño, puso en marcha tácticas de gobierno a través de los cuales se legitimaron nuevos agentes, quienes se disputaron el control del capital en el que se transformaron las prácticas y conocimientos medicinales indígenas. En un clima altamente agitado por la política indígena de los gobiernos democráticos y los efectos de la recién inaugurada era del neoliberalismo multicultural a través de la implementación del programa Orígenes, “la participación social”, “la interculturalidad” y el “desarrollo integral con identidad” se transformaron en los ejes de una lucha política por el control de los mecanismos de producción y representación social de las diferencias. A su vez, con la llegada de este componente, a nuestro entender se desplegaron estrategias que intentaron regular las prácticas curativas indígenas y desplazar el espacio terapéutico hacia formas y lugares instituidos por la burocracia estatal de la salud pública. En síntesis, agentes indígenas, estatales y multilaterales en este último período, participaron activamente en el juego y

la batalla de constituirse en los administradores de las diferencias culturales dentro de este nuevo campo de la salud intercultural.

El neoliberalismo multicultural implementado en Chile en el período democrático se presentó entonces como un nuevo *arte de gobierno* (*government*), en el que el *ethnos* apareció tanto como una estrategia de incorporación de las minorías indígenas a las políticas neoliberales actuales, así como un mecanismo sociopolítico a través del cual regular la vida de estas poblaciones. Foucault llamó a este dispositivo biopoder, entendiendo por éste el modo cada vez más detallado y exhaustivo a través del cual regular la conducta (FOUCAULT, 2006), ya no sólo a través de técnicas disciplinarias sobre el cuerpo de los individuos (anatomopolítica), sino a través de tácticas dirigidas hacia la población (biopolítica). Las poblaciones indígenas se constituyeron desde esta perspectiva, en el nuevo objeto de gobierno del Estado multicultural en Chile a través de prácticas de gobierno que pretendieron incorporarlas como grupos vulnerables. Esta nueva inclusión étnica se buscó realizar a través de una reelaboración del concepto de “capital social” como clave para pensar el desarrollo integral con identidad o etnodesarrollo. La reelaboración de este concepto impulsada por las agencias de desarrollo global, se fundamentó en la idea de que el fortalecimiento del capital social generaba *ipso facto* procesos democratizadores y de desarrollo más óptimos, otorgándole una nueva función a la cultura en la integración social y convirtiéndola en un medio despolitizado de adaptación al mercado (BAGNASCO et al., 2003).

La gestión o administración de la diferencia que realizó el estado multicultural y neoliberal en Chile en tanto nuevo arte de gobierno, se configuró en una racionalidad gubernamental que dirigida a los pueblos indígenas, se constituyó como señala Boccara en una forma de (*etno*) *gubernamentalidad* (BOCCARA, 2007). Ésta se caracterizaría por operar vía etnización de las demandas indígenas, en este caso en relación a la salud atacameña, a través de procesos de subjetivación y espacialización que tenderían a la producción de ciudadanos étnicos y clientes exóticos del

sistema capitalista. Este proceso se realizó a través de nuevos dispositivos de territorialización/espacialización -geopolítica- que legitimaron al mercado de la cultura indígena como un bien simbólico, así como tácticas de individualización/subjetivación -biopolítica-, que definieron renovadas formas de *aboriginalidad y nación* (BRIONES, 2005, p. 15).

Contradiciendo a la mayoría de las posiciones que afirman un retiro del Estado como parte fundamental de las políticas neoliberales, nuestra perspectiva sostiene que el Estado en Chile, más que debilitarse en un contexto de globalización y transnacionalización neoliberal, se reorganizó a través de la política multicultural, interviniendo de manera novedosa en la incorporación de las poblaciones indígenas nacionales. Se realizó así una ubicación de los sujetos a través del componente étnico, como forma de insertarlos en los nuevos mercados y modos de circulación de los bienes simbólicos (BOURDIEU, 1997): en este caso respecto a los saberes y prácticas medicinales indígenas. En este sentido, asumimos al neoliberalismo multicultural no sólo como un espacio sino también como una práctica de gobierno a través de la cual operaron heterogéneos dispositivos de control y educación de los deseos y necesidades de la población (LI, 2007). Estas prácticas se justificaron a través de la entrega de herramientas técnicas para mejorar la vida de las personas, excluyendo las dimensiones políticas que generaron los problemas del desarrollo, la pobreza y la exclusión. No obstante y sin desconocer que las prácticas de gobierno tienden a la sujeción y subjetivación de los individuos a través de formas de automejoramiento, éstas a su vez, pueden producir transformaciones en favor de otros agentes. Inda afirma en este sentido, que los sujetos de gobierno:

negocian los procesos en los cuales ellos son subjetivados. Por eso es importante mirar no sólo las formas de identidad individual y colectiva promovidas por las prácticas de gobierno, sino también en cómo los agentes particulares negocian estas formas, como ellos las aceptan, las adaptan, las rechazan (INDA, 2005, p. 11).

En el caso de las comunidades atacameñas del salar de Atacama, éstas permanentemente contestaron las formas de *participación impuesta* o *participación exprés* impulsadas desde los espacios orientados a democratizar la salud como fue el Consejo de Desarrollo Local creado al interior de las dependencias del consultorio local. De la misma manera lo hicieron cuando el Estado y sus aliados paraestatales (CONADI) y multilaterales (BID) se arrogaron las definiciones sobre cómo debía diseñarse una “experiencia en salud intercultural atacameña”, imponiendo determinados lenguajes y expertos a la razón de una progresiva marginación de los sanadores y curanderos locales. Por último, y una vez construida una sala de atención destinada al trabajo de los sanadores, cuya edificación contravenía los aspectos más medulares de la cosmovisión atacameña en salud, éstos fueron criminalizados y demonizados por su resistencia a burocratizar sus prácticas al interior de las estructuras autorizadas de la salud pública (BOLADOS, 2011 y 2012).

Las resistencias indígenas y las movilizaciones post multiculturalistas

A casi tres décadas del retorno de la democracia en Chile y cuatro décadas de instalado el modelo neoliberal, cabe preguntarnos sobre ¿cuál fue la democracia que retornó? Más aún, luego de que los movimientos sociales e indígenas en las últimas décadas sacaron sus voces y cuerpos para protestar ante diferentes demandas sociales y culturales pendientes. El movimiento estudiantil conocido como la revolución pingüina hizo su aparición el 2006 a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet, el cual luego de promesas incumplidas, realizaron una dura embestida el 2010 durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esta vez con una dirigencia estudiantil universitaria que puso en jaque el sistema de educación superior bajo los lineamientos neoliberales que legitimaron el lucro de estas universidad-empresas y el

endeudamiento de una parte importante del estudiantado y sus familias por los créditos e intereses impuestos por los bancos involucrados en el negocio de la educación. En el mismo período, las comunidades indígenas atacameñas en el norte de Chile salieron a la luz tanto nacional como internacionalmente el año 2007 debido a su oposición al proyecto para la extracción de aguas subterráneas por más de mil litros por segundo de la empresa Minera Escondida (segunda productora de cobre), principal trasnacional que opera en Chile y que desde el año 1997 mostró una activa participación en el desarrollo local, regional y nacional a través de la creación de una fundación. La Fundación Minera Escondida -FME-, primera fundación perteneciente a una minera trasnacional se erigirá como una de las *thinks thanks* más influyentes de la sustentabilidad social y ambiental, cuyos fondos y programas aparecerán como una de las principales marcas de la responsabilidad social empresarial en Chile. En pleno conflicto de Pampa Colorada, cuya imagen de un salar enlutado por banderas negras recorrió el país señalando su muerte como la de sus habitantes, se produce la explosión descontrolada de una fumarola en el sector turístico conocido internacionalmente como “Geiseres del Tatio”. Se estaban realizando obras de sondaje para la exploración geotérmica. Esta vez, las actividades involucraron a empresas nacionales como la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), las cuales conformaron un consorcio con la multinacional italiana ENEL (actualmente la empresa trasnacional que controla más del 80% de la energía en Chile). Las acciones de estas exploraciones que tuvieron oposición de las comunidades desde los inicios del proyecto, se radicalizaron una vez ocurrido el daño ambiental provocado, lo cual movilizó a comunidades indígenas, organizaciones sociales y operadores turísticos tanto nacionales como internacionales que se unieron en una lucha que se conoció como la “defensa del Tatio”. Finalmente y por las enormes presiones políticas ejercidas por las organizaciones y comunidades hacia las autoridades a nivel regional y nacional, es que el proyecto se detuvo el 2009. La institucionalidad

ambiental, indígena y patrimonial aprobada en la década de los años 1990, mostraron su debilidad e incapacidad para hacer cumplir sus normas de resguardo de los recursos naturales y culturales comprometidos, y a su vez, dieron cuenta de su compatibilidad con las exigencias de las corporaciones transnacionales. No obstante, estas debilidades fueron aplacadas y contenidas en parte y durante un tiempo breve, con las estrategias de movilización y judicialización que emprendieron las comunidades atacameñas junto a otros grupos locales, regionales y nacionales. De un lado, las comunidades parecían haber ganado ambas batallas –las de Pampa Colorada y el Tatio- impensables frente a empresas poderosas y ante el propio Estado. Sin embargo, esta sensación de triunfo rápidamente se esfumó, luego de que durante el 2010 y 2011 tomaran conocimiento -y no por canales directos- de una multiplicidad de adjudicaciones geotérmicas realizadas en sus territorios. Aunque en el centro de las disputas estaba el tema de quien controlaba los recursos ambientales de estos territorios reconocidos como indígenas, el gran tema de las organizaciones eran los mecanismos de participación impuestos por el Estado, los cuales y porque la misma legislación ambiental lo permitía, realizaron “consultas no vinculantes” una vez que estos proyectos ya se encontraban en etapa de aprobación y sin poder realizarles mayores objeciones. Las oposiciones de las comunidades se sustentaron esta vez, no sobre las legislaciones indígenas y ambientales nacionales, sino en la transgresión al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el 2009 durante el gobierno de Bachelet que entre sus múltiples puntos obliga a los estados a realizar una consulta libre e informada de los proyectos que se realizan en territorios indígenas.

El *re*-conocimiento a los pueblos indígenas ofrecido durante la era indigenista y multicultural mostraba ser un proyecto erosionado en sus pilares fundamentales, en tanto las acciones del Estado chileno seguían sustentándose en el *des*-conocimiento y la negación de las históricas demandas planteadas por las comunidades y organizaciones indígenas: el

territorio y sus recursos de un lado; del otro, la participación y la autonomía. Una vez, ocurrido estos hechos, las comunidades atacameñas emprendieron un cambio en sus luchas contra el capital: de las estrategias de movilización del 2007 al 2009 en Pampa Colorada y el Tatio, las acciones se concentraron en judicializar los casos en instancias nacionales interponiendo recursos de protección. Paralelo a la toma de conocimiento de las comunidades de los decretos de estas adjudicaciones, es que el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera lanza la propuesta de licitación internacional del litio así también como de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), una de las cuales -la Reserva Nacional Los Flamencos-, hasta ese momento estaba siendo administradas con la participación de las comunidades atacameñas del sector. Los habitantes del Salar de Atacama –indígenas y no indígenas-, nuevamente se alertaron y movilizaron frente a estas embestidas, dando signos de que estaban mejor preparados que durante los conflictos de Pampa Colorada y el Tatio. Esta vez, se impuso el conocimiento técnico y jurídico como un arma de lucha para las comunidades y organizaciones, los cuales durante estos años fueron adquiriendo tanta o más experticia en temas de derechos culturales y ambientales, que los representantes del propio Estado y del mundo privado.

Las acciones emprendidas por las comunidades atacameñas frente a las adjudicaciones geotérmicas realizadas por el Estado entre el año 2009 y 2010 (en particular contra el ministerio de energía y el ministerio de economía), coincidieron con las acciones realizadas por otros movimientos sociales y ambientales que mantuvieron alertas al Estado y a las empresas nacionales y transnacionales. Los mecanismos y dispositivos de poder y disciplinamiento desplegados por la agencia estatal-trasnacional para imponer sus intereses al interior del neoliberalismo multicultural en la década anterior, mostraron su incapacidad para apaciguar y desmovilizar las luchas indígenas contra la actividad minera y su política de depredación hídrica en el norte.

En el extremo sur, la construcción de la hidroeléctrica “HidroAysén”

protagonizó movilizaciones que adquirieron relevancia nacional e internacional (LATTA, 2011). A estas oposiciones, se les sumaron las de sectores pesqueros y otros grupos de la región de Aysén que iniciaron cortes de rutas y protestas, demandando políticas de apoyo del Estado a zonas extremas. En el norte, la protestas en Calama reclamaban los “beneficios del cobre” movilizándolo a gran parte de la Provincia del Loa. En definitiva, las múltiples movilizaciones y protestas que se activaron en Chile en la última década, sacudieron el andamiaje impuesto por el Estado y las trasnacionales, y pusieron en tela de juicio los diversos instrumentos legales tanto nacionales como internacionales orientados al resguardo y protección de los pueblos indígenas, del medioambiente y del patrimonio tangible e intangible. Movilizaciones que irrumpieron en plena era multiculturalista y cuyo aterrizaje grandilocuente en términos de marqueteo y recursos, se dio con el Programa Orígenes. Este mostró las ambigüedades y contradicciones entre la política indígena y multicultural y la política energética que comenzaba a delinearse a partir de los tratados de libre comercio que se firmaron en ese período y las estrategias de Chile para ingresar a la OCDE (TECKLIN, BAUER y PRIETO, 2011). Estos hechos dejaron en evidencia las limitaciones de las protecciones inauguradas bajo los paradigmas de la democracia y el multiculturalismo. Todas ellas mostraron funcionar articuladas con el andamiaje neoliberal impuesto en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un modelo puesto a prueba en Chile por un grupo de economistas conocido como los *chicago boys* durante el período de dictadura, el cual se estructuró en base al decreto de Inversión Extranjera Directa (IED) del año 1975, el código de aguas del año 1981 y el código minero del año 1982. Estos instrumentos quedaron consagrados en la Constitución de 1980 bajo el artículo que privilegia la propiedad privada. En el caso del decreto ley 600 de IED, fue un impulso y una liberalización del espacio económico para el ingreso sin restricciones de capitales trasnacionales. A su vez, el código de aguas socavó el principio básico de la tenencia de la tierra tradicional andina, donde los recursos de la tierra y el

agua conformaban una sola unidad consustancial, dividiendo las organizaciones y entregando la gestión del agua a la Dirección General de Aguas (DGA). Esta favoreció la concesión de derechos de aguas en propiedades particulares y comunitarias, generando una sobreexplotación de los mismos y un progresivo deterioro de los recursos ambientales y culturales existente en estos territorios tales como humedales, salares, vegas, etc. El código minero, en esta misma lógica privatista, favoreció la entrega de derechos mineros en territorios indígenas, los cuales durante el siglo XX habían sido inscritos como “fiscales” y desde mediados de los años 1970 entregados a privados.

Reflexiones finales

El nuevo milenio dejó en evidencia las paradojas de la democracia chilena, sus ambigüedades y la confluencia perversa involucrada en los intentos de compatibilizar democracia política y neoliberalismo económico. La perversidad de esta confluencia se revela -señala Dagnino (2006)- en que ambos proyectos, el democrático y el neoliberal exigen un sujeto activo, comprometido y empoderado. El neoliberalismo propuesto por los gobiernos democráticos bajo los discursos de modernización con justicia social y desarrollo con equidad, que algunos definieron como neoliberalismo templado, tercera vía (TAYLOR, 2006) o un neoliberalismo sui generis (GÁRATE, 2010), inauguraron a nuestro entender un nuevo tipo de racionalidad gubernamental neoliberal. Como sostiene Taylor (2006) y Dávalos (2010), esta razón neoliberal tiene su razón en que no se ciñe a las dimensiones económicas de la vida, sino a una multiplicidad de otros aspectos de la misma como es la política, la cultura, la ética, etc. Tal es la profundidad epistemológica y el dinamismo social que la sustenta, que ha logrado arraigarse incluso en algunas de las críticas aparentemente anti-neoliberales, haciendo indispensable reflexionar sobre las transformaciones

que éste ha tenido en nuestra región (DÁVALOS, 2010, p. 6). No obstante, a su avance y penetración en campos de la cultura, grupos y organizaciones, retomando la misma lógica de mercado y su consecuente lenguaje, presionan sobre los efectos de esta racionalidad generando tensiones que friccionan la propuesta hegemónica del neoliberalismo y señalan los efectos perversos y adversos sobre el medio ambiente y las relaciones sociales enmarcadas en formatos regulados por la oferta y demanda, la búsqueda irrefrenada de utilidades, así como criterios exclusivos de rentabilidad social, etc. La mercantilización de la sociedad y en ella, la de sus culturas incluidas en las formas de una etnicidad como Sociedad Anónima S.A. (COMAROFF y COMAROFF, 2009), experimenta tensiones y rupturas, en algunos casos suficientes para preocupar y ocupar creativamente al Estado y las corporaciones trasnacionales en la búsqueda de nuevas estrategias para expandir y legitimar su propuesta. Por ejemplo, a través de tácticas más directas e intrusivas en el desarrollo y construcción de lo local, de políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) y/o programas como Orígenes. En el caso de las comunidades atacameñas en el salar de Atacama, norte de Chile, estas han dejado en evidencia las contradicciones de las prácticas de la sustentabilidad y sus acciones de rescate de la cultura local, así como la incoherencia de la gobernanza trasnacional minera que mientras implementa programas pro agricultura, día a día extrae aguas subterráneas de manera irrestricta, amenazando la posibilidad de reproducción material y simbólica de sus habitantes.

No resulta fácil pensar cómo un país como Chile pudiese desandar semejante camino, ni mucho menos cómo podría reconstruir su tejido social sin mediar la racionalidad neoliberal impuesta con violencia, sea esta física en dictadura y simbólica en democracia. No obstante, las movilizaciones indígenas y estudiantiles de la última década, claramente han puesto en crisis la hasta ahora revitalizante democracia neoliberal, dejando entrever incluso a las nuevas autoridades de centro izquierda, que el descontento llegó para quedarse y para exigir respuestas concretas a las deudas

históricas pendientes.

Referencias bibliográficas

AYLWIN, José. La Política del “Nuevo Trato”. Antecedentes, alcances, limitaciones. In: YÁÑEZ, Nancy; AYLWIN, José (Org.). **El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”**: las paradojas de la democracia chilena. Santiago: LOM Ediciones, 2007. p. 19-29.

BAGNASCO, Arnaldo *et al.* **El capital social**: instrucciones de uso. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

BELLO, Álvaro. El Programa Orígenes y la política pública del gobierno de Lagos hacia los pueblos indígenas. In: YÁÑEZ, Nancy; AYLWIN, José (Org.). **El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”**: las paradojas de la democracia chilena. Santiago: LOM Ediciones, 2007. p. 193-220.

BOCCARA, Guillaume. Etnogubernamentalidad: la formación del campo de la salud intercultural en Chile. **Chungara**, Arica, v. 39, n. 2, p. 185-207, 2007.

BOCCARA, Guillaume; BOLADOS, Paola. ¿Qué es el multiculturalismo?: política étnica y pueblos indígenas en el Chile neoliberal. **Revista de Indias**, Madrid, v. 70, n. 250, p. 651-690, 2010.

BOLADOS, Paola. Neoliberalismo multicultural en el Chile postdictadura: la política indígena en salud y sus efectos en comunidades mapuches y atacameñas. **Chungara**, Arica, v. 44, n. 1, p. 135-144, 2012.

_____. Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización. **Nuevo Mundo Mundos Nuevos**, n.n., n.p., 2011. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/61368>. Acceso en: 22 jun. 2015.

BOURDIEU, Pierre. **Razones prácticas**. Barcelona: Editorial Anagrama. 1997.

BRETÓN, Víctor. Neoliberalismo, etnicidad y etnofagia en América Latina: la experiencia de los Andes del Ecuador. In: **International Congress of the Latin American Studies Association. Meeting of the LASA**, 24., 2003, Dallas, Texas.

BRIONES, Claudia. Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales. In: _____. (Org.). **Cartografías argentinas**: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires: Antropofagia, 2005. p. 11-44.

COMAROFF, John; COMAROFF, Jean. **Ethnicity Inc**. Chicago: The University of

Chicago Press, 2009.

COMISIÓN VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO. **Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato**, 2003. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf. Acceso en: 23 jun. 2013.

CUYUL, Andrés. **La burocratización de la salud intercultural: del neo-asistencialismo al autogobierno mapuche en salud**. 2008. Disponible en: www.mapuexpress.net/images/publications/13_5_2008_17_18_49_1.pdf . Acceso en: 23 jun. 2013.

DAGNINO, Evelina. Concepciones de la ciudadanía en Brasil: proyectos políticos en disputa. In: CHERESKY, Isidoro (Org.). **Ciudadanía, sociedad civil y participación política**. Buenos Aires: Miño y Dávila editores, 2006. p. 387-410.

DÁVALOS, Pablo. **La democracia disciplinaria: el proyecto postneoliberal para América Latina**. Quito: CODEU, 2010.

FASSIN, Didier; MEMMI, Dominique. Le gouvernement de la vie, mode d'emploi. In: _____. (Org.). **Le gouvernement des corps**. Paris: Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2004. p. 9-33.

FOUCAULT, Michel. Governmentality. In: FERGUSON, James; GUPTA, Akhil, (Org.). **The anthropology of the state**. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing, 2006. p. 131-143.

GÁRATE, Manuel. **La Revolución Capitalista de Chile (1973-2003)**. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.

GRÜNER, Eduardo. El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Žižek. In: JAMESON, Frederic; ŽIŽEK, Slavoj (Org.). **Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo**. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 2005. p. 11-67.

HALE, Charles. Does multiculturalism menace?: governance, cultural rights and the politics of identity in Guatemala. **Journal of Latin American Studies**, v. 34, n. 3, p. 485-524, 2002.

INDA, Jonathan. Analytics of the modern: an introduction. In: _____. (Org.). **Anthropologies of modernity: Foucault, governmentality, and politics of life**. Malden: Blackwell Publishing, 2005. p. 1-20.

LATTA, Alex. Los desastres planificados: magaproyectos y trauma socio-ambiental. El caso de HidroAysén. **Sociedad Hoy**, Concepción, v. 20, p. 111-129, 2011.

LI, Tania. **The will to improve: governmentality, development and the practice of politics**. USA: Duke University Press, 2007.

PALEY, Julia. **Marketing democracy: power and social movement in post-dictatorship**. Chile/Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 2001.

ROSE, Nikolas. Governing 'advanced' liberal democracies. In: SHARMA, Aradhana; GUPTA, Akhil (Org.). **The anthropology of the state**. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing, 2006. p. 144-162.

SCHILD, Verónica. Neo-liberalism's new gendered market citizens: the "civilizing" dimension of social programmes in Chile. **Citizenship Studies**, UK, v. 4, n. 3, p. 275-305, 2000.

TAYLOR, Marcus. **From Pinochet to the "third way"**: neoliberalism and social transformation in Chile. London: Pluto Press, 2006.

TECKLIN David; BAUER, Carl; PRIETO, Manuel. Making environmental law for the market: the emergence, character, and implications of Chile's environmental regime. **Environmental Politics**, UK, v. 20, n. 6, p. 879-898, 2011.

WATTS, Michael. Development and governmentality. **Singapore Journal of Tropical Geography**, Singapur, v. 24, n. 1, p. 6-34, 2003.

WRIGHT, Susan. The politicization of "culture". **Anthropology Today**, UK, v. 14, n. 1, p. 7-15, 1998.

ŽIŽEK, Slavoj. Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional. In: F. Jameson y S. Žižek (Org.). **Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo**. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 2005. p. 137-188.

Recebido em: 05/05/2015.

Aprovado em: 28/05/2015.

Publicado em: 30/06/2015.